



De la movilización a la participación

Los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que tienen un papel más visible en estas movilizaciones de oposición han demostrado una casi nula capacidad propositiva para definir lo que a grandes rasgos podemos llamar "el proyecto", valga decir, qué país se proponen construir

El pasado 11 de julio toda Venezuela fue testigo de una importante manifestación opositora. No se trataba de una conspiración pero se hizo con un claro objetivo: exigir la salida del presidente Hugo Chávez. Más allá de las consideraciones numéricas, asunto sobre el cual hay —como era de esperarse— diferencias notables, la manifestación reflejó claramente que el rechazo al gobierno para nada es escuálido y que una lectura políticamente sensata de las autoridades debería pasar por reconocer este fenómeno. Estamos ante un rechazo centrado específicamente en la figura presidencial que no fue coyuntural o manipulado (tesis manejadas en abril pasado), que adicionalmente ha tomado la calle como escenario, y que insiste en una salida pacífica para la crisis.

Dejando claramente establecida la importancia de esta manifestación, cabe preguntarse sobre sus fines y sobre escenarios posibles en caso de lograr estos objetivos. Estas consideraciones están, asimismo, marcadas por la visión de que además de movilización hay que promover participación, porque solamente con proyectos genuinamente participativos de los ciudadanos de Venezuela, podremos hacer país.

Del estado de ánimo al proyecto

Lo que se ha evidenciado, nuevamente, este 11 de julio, es un estado de ánimo opositor al presidente Chávez.

Ha crecido en los últimos meses y ha sido alimentado, en parte, por la propia torpeza oficial en algunos asuntos. Según algunos estudios de opinión pública, el punto de quiebre fue la respuesta autoritaria y arrogante ante los pedidos de revisión del paquete de leyes contenidas en la Ley Habilitante del año pasado. Desde entonces, se hizo palpable y fue tomando fuerza, hasta expresarse en las calles y masivamente a partir del 23 de enero de 2002.

Si bien el estado de ánimo está claramente definido, y el mismo podría resumirse en la frase "lo que queremos es que Chávez se vaya", detrás no se percibe a las claras un proyecto de país alternativo al que el Presidente enuncia permanentemente (aunque tampoco lo logra ejecutar cabalmente). Los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que tienen un papel más visible en estas movilizaciones de oposición han demostrado una casi nula capacidad propositiva para definir lo que a grandes rasgos podemos llamar "el proyecto", valga decir, qué país se proponen construir.

Hasta ahora tenemos más de la filosofía del ya célebre personaje de "Por estas calles", Eudomar Santos, y que en este contexto es algo así como "primero salgamos de Chávez y después veamos como arreglamos la vaina". Paralelamente, lo que sí hemos venido presenciando es un sinfín de voceros, que cada semana anuncian una nueva estrategia (recolección de firmas, recorte de mandato presidencial, enjuicia-

miento, etcétera) sin que se vean claramente los procesos de participación ciudadana en cada uno de esos anuncios, y en algunos casos, tampoco se percibe la conexión entre ellos.

Podría pensarse que hacerles una exigencia de "el proyecto" a esta amalgama variopinta, unida exclusivamente por la meta de salir de Chávez, es como pedir peras al olmo, pero justamente la exigencia debe ser clara: queremos saber qué país quieren y cómo piensan alcanzarlo. Pero además, con una condición, como lo que deseamos es un país diferente, sin repetir errores pasados, el eje debe ser la participación. Esta participación, como nos lo ha enseñado la experiencia del actual gobierno, no se decreta desde el poder central, sencillamente se construye desde abajo y por sobre todas las cosas, se cree en ella.

Jugando al golpe

La marcha del 11 de julio tuvo a su vez una vertiente sobre la cual vale la pena reflexionar: la golpista. Más allá de las diferencias que salieron a flote en el seno de la coordinadora opositora, el documento entregado en La Carlota y varios pronunciamientos dados en esa base militar, lo que esta acción evidenció es que algunos actores políticos siguen apostando a que los problemas del país deben ser resueltos por los uniformados, y por tanto, con el apoyo desde los cuarteles se podrá salir de Chávez.

Esta postura, en sí misma, es la negación de la democracia y de las posibilidades de solución democrática de la crisis que atraviesa el país y que no sólo se limita a la esfera política. Dejar en manos de unos mandos militares "la solución" es también echar por la borda la posibilidad de que se genere un proyecto participativo de este –hasta ahora– estado de ánimo opositor. Para pensar en un país post-Chávez que no sea una copia peor que el actual gobierno, debería ponerse el énfasis en el proceso y no en el fin, es decir, cómo logramos construir una opción democrática desde abajo que se contraponga a lo que se considera un modelo autoritario, sin imponer un autoritarismo de nueva ola.

Jugar al golpe demuestra que la única meta de estos actores es salir de

Chávez "a cualquier precio". Situaciones como la vivida por la sociedad venezolana en abril pasado dejaron en claro que cualquier precio lo paga –con su vida– el más débil: entre los muertos del 11 de abril (sin importar su bando político) no se cuentan destacadas figuras públicas, que por ejemplo, arriesgaran su vida en defensa de sus ideales.

Del mismo modo, la nada espontánea decisión de estos actores durante el 11 de julio de dirigirse a La Carlota repitió un fenómeno también vivido en abril: cada quien tiene su agenda (oculta).

Si miramos qué ha pasado, nos percatamos de que en ambos momentos se han producido imponentes manifestaciones callejeras (masivas no tanto por la capacidad de convocatoria de sus organizadores sino porque justamente existe un estado de ánimo opositor), ante las cuales algunos actores han intentado sacar provecho propio, poniendo sobre la mesa una carta que estaba debajo de la manga. Con agendas individuales (y ocultas además) se hace difícil ganar credibilidad a una coordinadora que pretende ser la opción para un escenario "post-Chávez".

Adicionalmente, si estos actores no saben interpretar que lo que se vive es un estado de ánimo (también alimentado por las respuestas del *chavismo*), si no tienen la capacidad de conjugar esta coyuntura en nuevas formas orgánicas de participación política de los ciudadanos, entonces será muy difícil creer en escenarios de gobernabilidad si alcanzan su fin, que no es otro que Chávez deje el poder.

Diálogo para qué

Más que de diálogo debería hablarse de negociaciones políticas. La crisis en la que está el país no sólo amerita un espacio para sentarse en una mesa, mirarse las caras e intercambiar ideas. La dinámica de diálogo, en un contexto como el actual, pasa necesariamente por negociaciones entre actores políticos. Si la condición para sentarse a negociar, por parte de la oposición, es que el presidente Chávez se vaya, difícilmente se podrá dialogar. En este contexto, no debemos olvidar (y tampoco lo deberían obviar los

actores involucrados) que pese a la falta de capacidad política para ampliar su base de apoyo, por parte de quienes dirigen el Estado, al menos un tercio de la población venezolana sigue creyendo en el imaginario de lo que representa el proyecto político de la "Revolución Bolivariana".

Tampoco podrá avanzar un proceso en el que el gobierno excluya de la mesa a quienes se le oponen tajantemente, cuando en realidad es con ellos con quien debería negociar. Razón tienen quienes creen que este diálogo encabezado por el vicepresidente José Vicente Rangel debe tener definido un fin claro, pero también esto, definir los alcances de la negociación política, requiere de que los diferentes actores se sienten a la mesa. La visita del expresidente estadounidense Jimmy Carter, casualmente en vísperas de la marcha del 11 de julio, debió haber sido ese primer paso.

Cuando se negaron a asistir a la reunión mediada por Carter, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de oposición perdieron una oportunidad importante de asentar exigencias no sólo ante su adversario político, el presidente Chávez, sino ante un tercero de cuya imparcialidad no debemos dudar de antemano.

La negociación política que requiere el país, especialmente cuando se desea (como lo desea hoy la oposición) un horizonte sin Chávez en el poder, pasa necesariamente por dar respuesta en ese proyecto a los pobres y excluidos que han encontrado en el presidente una esperanza. Esto es diálogo social y nacional, esto requiere pensar y apostar a hacer país, y sobre todo, construir participación en este proceso. Si bien puede sonar a quimera, debe darse el primer paso en esa dirección, de lo contrario la profunda crisis actual nos seguirá acompañando aún cuando sea otro quien ocupe el sillón presidencial de Miraflores.

Andrés Cañizález

Profesor de la UCV
Director de la revista Comunicación